

Decreto de Necesidad y Urgencia que prorroga la prohibición de efectuar despidos y suspensiones por el plazo de sesenta días

DECRETO NACIONAL 487/2020
CAPITAL FEDERAL, 18 de Mayo de 2020
Boletín Oficial, 19 de Mayo de 2020
Vigente, de alcance general
Id SAIJ: DN20200000487

Sumario

emergencia pública, emergencia sanitaria, coronavirus, decreto de necesidad y urgencia, despido sin causa, despido del trabajador, suspensión del trabajador, suspensión de despidos, Bienestar social, Salud pública, Derecho administrativo, Derecho laboral

Por Decreto de Necesidad y Urgencia se prorroga la prohibición de efectuar despidos y suspensiones por el plazo de sesenta días

Visto

el Expediente N° EX-2020-32766381-APN-DGDMT#MPYT, la [Ley N° 27.541](#), los [Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020](#) y su modificatorio, [297 del 19 de marzo de 2020](#), sus modificatorios y complementarios, [329 del 31 de marzo de 2020](#), la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 359 del 24 de abril de 2020, y

Considerando

Que por la [Ley N° 27.541](#) se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Que la crisis económica en que se encontraba el país se vio agravada por el brote del nuevo Coronavirus, que diera lugar a la declaración de pandemia por COVID -19, por parte de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que en dicho contexto, se dictó el [Decreto N° 260/20](#) por el que se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto.

Que, con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado nacional, se dictó el [Decreto N° 297/20](#) por el que se dispuso el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", el que fue prorrogado por los [Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20 y 459/2020](#), hasta el 24 de mayo inclusive.

Que dicha medida impacta directamente sobre la actividad económica del país y en el sistema de producción de bienes y servicios, cuestión que ha sido considerada por este Gobierno conforme lo dispuesto en los [Decretos Nros. 316 del 28 de marzo de 2020, 320 del 31 de marzo de 2020, 332 del 1° de abril de 2020](#) y sus modificatorios, por los que se dispuso la constitución de un Fondo de Afectación Específica en el marco de la

[Ley N° 25.300](#) y sus modificatorias, el Fondo de Garantías Argentino (FoGAR), con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a préstamos para capital de trabajo y pago de salarios, y el decreto que crea el Programa de "Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción" para empleadores y empleadoras y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria y la coyuntura económica; así como la prórroga del Régimen de Regularización tributaria establecido en el último párrafo del [artículo 8° de la Ley N° 27.541](#), entre otras de las muchas normas ya dictadas.

Que, en esta normativa se estableció una serie de medidas que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia, entre ellas, la postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios, en función de la gravedad de la situación del sector y del tamaño de la empresa. Asimismo, se han dispuesto garantías públicas con el fin de facilitar el acceso al crédito de micro, medianas y pequeñas empresas (MiPyMES) Que como correlato necesario a las medidas de apoyo y sostén para el funcionamiento de las empresas, en el contexto de emergencia, por el [Decreto N° 329 del 31 de marzo de 2020](#) se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días.

Que, asimismo, por el citado decreto se prohibieron las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por idéntico plazo, quedando exceptuadas de dicha prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del [artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo](#). Que, en ese marco, se dispuso que los despidos y las suspensiones efectuados en violación a lo establecido en el artículo 2° y primer párrafo del artículo 3° del aludido decreto, no producirían efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.

Que esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo.

Que en el marco de las obligaciones asumidas por la REPÚBLICA ARGENTINA en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con el objetivo de preservar la paz social, corresponde adoptar medidas transitorias, proporcionadas y razonables, con el fin de garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante su trabajo, que le asegure condiciones de existencia dignas para ellas y para sus familias.

Que, a su vez, el [artículo 14 bis de la CONSTITUCIÓN NACIONAL](#) impone una protección específica al trabajo en sus diversas formas y en la coyuntura, deviene indispensable la preservación de los puestos de trabajo.

Que la Organización Internacional del Trabajo, el 23 de marzo de 2020, ha emitido un documento "Las normas de la OIT y el Covid 19 (Coronavirus)" que revela la preocupación mundial y alude a la necesidad de que los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo, en particular en lo referido a la conservación de los puestos de labor y en tal sentido recuerda la importancia de tener presente la Recomendación 166, que subraya "que todas las partes interesadas deberían tratar de evitar o limitar en todo lo posible la terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, sin perjuicio para el funcionamiento eficaz de la empresa, establecimiento o servicio, y esforzarse por atenuar las consecuencias adversas de toda terminación de la relación de trabajo por estos motivos, para el trabajador o trabajadores interesados."

Que, por su parte, el [artículo 1733 del Código Civil y Comercial de la Nación en su inciso b\)](#) establece expresamente la posibilidad que la "fuerza mayor" no exima de consecuencias o pueda ser neutralizada en sus

efectos cuando una disposición legal así lo prevea.

Que una situación de crisis como la que motivó el dictado de las medidas de emergencia ya citadas, autoriza a colegir que cabe atender el principio establecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en "Aquino", Fallos 327:3753, considerando 3, en orden a considerar al trabajador o trabajadora como sujetos de preferente tutela, por imperio de lo ordenado por la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que, asimismo, resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura remediar.

Que la [Ley N° 26.122](#) regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el [artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL](#). Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el [artículo 22 de la Ley N° 26.122](#) dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el [artículo 82 de la Carta Magna](#). Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de Ministros decreta:

ARTÍCULO 1°.- El presente decreto se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la [Ley N° 27.541](#), la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el [Decreto N° 260/20](#) y su modificatorio y el [Decreto N° 297/20](#) que estableció la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", que fuera prorrogado por los Decretos [Nros. 325/20, 355/20, 408/20 y 459/2020](#), hasta el 24 de mayo inclusive.

ARTÍCULO 2°.- Prorrógase la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el [Decreto N° 329/20](#).

ARTÍCULO 3°.- Prorrógase la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de SESENTA (60) días, contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el [Decreto N° 329/20](#).

Quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del [artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo](#).

ARTÍCULO 4°.- Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° y primer párrafo del artículo 3° del presente decreto, no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.

ARTÍCULO 5°.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Firmantes

FERNÁNDEZ-Cafiero-de Pedro-Solá-Rossi-Guzmán-Kulfas-
Basterra-Meoni-Katopodis-Losardo-Frederic-González García-Arroyo-Alcorta-Trotta-Bauer-Salvarezza-Moroni-
Cabandie-Lammens-Bielsa

Decree of Necessity and Urgency that extends the prohibition of making layoffs and suspensions for a period of sixty days

NATIONAL DECREE 487/2020
FEDERAL CAPITAL, May 18, 2020
Official Bulletin, May 19, 2020
Valid, general in scope
Id SAIJ: DN20200000487

Summary

public emergency, health emergency, coronavirus, decree of necessity and urgency, dismissal without cause, dismissal of the worker, suspension of the worker, suspension of dismissals, social welfare, public health, administrative law, labor law

By Decree of Necessity and Urgency, the prohibition on dismissals and suspensions is extended for a period of sixty days.

Seen

File No. EX-2020-32766381-APN-DGDMT # MPYT, the [Law No. 27,541](#), the [Decrees Nos. 260 of March 12, 2020](#) and its amendment, [297 of March 19, 2020](#), its amendments and supplements, [329 of March 31, 2020](#), Resolution of the MINISTRY OF LABOR, EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY No. 359 of April 24 2020, and

Considering

That by [Law No. 27,541](#) the public emergency was declared in economic, financial, fiscal, administrative, social security, tariff, energy, health and social matters.

That the economic crisis in which the country was found was aggravated by the outbreak of the new Coronavirus, which gave rise to the declaration of a pandemic by COVID -19, by the WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).

That in this context, [Decree No. 260/20](#) was issued, which extended the public emergency in health matters established by the aforementioned law, for a period of ONE (1) year from the entry into force of said decree .

That, with the aim of protecting public health as an inalienable obligation of the national State, [Decree No. 297/20](#) was issued, establishing "social, preventive and compulsory isolation", which was extended by [Decree No. . 325/20](#) , [355/20](#) , [408/20](#) and [459/2020](#) , until May 24 inclusive.

That said measure has a direct impact on the economic activity of the country and on the production system of goods and services, an issue that has been considered by this Government in accordance with the provisions of [Decree Nos. 316 of March 28, 2020](#) , [320 of March 31, 2020](#) , [332 of April 1, 2020](#) and its amendments, which established the constitution of a Specific Affectation Fund within the framework of [Law No. 25,300](#) and its amendments, the Argentine Guarantee Fund (FoGAR), in order to grant guarantees to facilitate access by Micro,

Small and Medium-sized Enterprises to loans for working capital and payment of wages, and the decree that creates the Program of "Emergency Assistance to Work and Production" for employers and employers and workers affected by the health emergency and the economic situation; as well as the extension of the Tax Regularization Regime established in the last paragraph of [Article 8 of Law No. 27,541](#) , among others of the many regulations already issued.

That, in this regulation, a series of measures were established that aim to help companies cope with the effects of the emergency, including the postponement or reduction of various tax and social security obligations, assistance through specific programs of income transfers to contribute to the payment of wages and the modification of procedures for access to these benefits, depending on the severity of the situation in the sector and the size of the company. Likewise, public guarantees have been arranged in order to facilitate access to credit for micro, medium and small companies (MiPyMES), which as a necessary correlate to the support and support measures for the operation of companies, in the emergency context, for him [Decree No. 329 of March 31, 2020](#) , dismissals without just cause and for the reasons of lack or reduction of work and force majeure for the period of SIXTY (60) days were prohibited.

That, likewise, by the aforementioned decree, suspensions for reasons of force majeure or lack or reduction of work for the same period were prohibited, exceptions to said prohibition being made under the terms of [article 223 bis of the Labor Contract Law](#) . That, within this framework, it was established that the dismissals and suspensions carried out in violation of the provisions of article 2 and first paragraph of article 3 of the aforementioned decree, would not produce any effect, maintaining existing labor relations and their current conditions .

That this exceptional crisis requires an extension of the timely adoption of measures of the same nature, assuring workers that this emergency will not cause them to lose their jobs.

That within the framework of the obligations assumed by the ARGENTINE REPUBLIC in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and with the objective of preserving social peace, it is appropriate to adopt transitional, proportionate and reasonable measures, in order to guarantee the right to every person to have the opportunity to earn a living through their work, which ensures decent living conditions for themselves and their families.

That, in turn, [article 14 bis of the NATIONAL CONSTITUTION](#) imposes specific protection for work in its various forms and at the juncture, the preservation of jobs becomes essential.

That the International Labor Organization, on March 23, 2020, has issued a document "ILO standards and Covid 19 (Coronavirus)" that reveals global concern and alludes to the need for governments to implement measures aimed at mitigate the harmful effects in the world of work, particularly with regard to the preservation of jobs, and in this regard recalls the importance of bearing in mind Recommendation 166, which stresses "that all interested parties should try to avoid or limit as far as possible the termination of the employment relationship for economic, technological, structural or similar reasons, without prejudice to the effective operation of the company, establishment or service, and strive to mitigate the adverse consequences of any termination of the employment relationship for these reasons, for the worker or workers concerned. "

That, for its part, [article 1733 of the Civil and Commercial Code of the Nation in subsection b\)](#) expressly establishes the possibility that the "force majeure" does not exempt consequences or may be neutralized in its effects when a legal provision so provides. .

That a crisis situation such as the one that motivated the issuance of the aforementioned emergency measures,

authorizes that the principle established by the SUPREME COURT OF JUSTICE OF THE NATION in "Aquino", Judgments 327: 3753, considering 3, in order to consider the worker as subjects of preferential guardianship , under the rule of what is ordered by the NATIONAL CONSTITUTION.

That, likewise, it is essential to continue guaranteeing the preservation of jobs for a reasonable period, in order to preserve social peace, and that this will only be possible if the emergency occurs with a Social Dialogue at all levels and not with measures unilateral labor distraction, which will only be a way of aggravating the problems that preventive and compulsory social isolation seeks to remedy.

That [Law No. 26,122](#) regulates the procedure and scope of the intervention of the HONORABLE CONGRESS OF THE NATION with respect to the Decrees of Necessity and Urgency issued by the NATIONAL EXECUTIVE POWER, pursuant to the provisions of [article 99 subsection 3 of the CONSTITUTION NATIONAL](#). That the aforementioned law determines that the PERMANENT BICAMERAL COMMISSION has competence to rule on the validity or invalidity of the Decrees of Necessity and Urgency, as well as to submit the opinion to the plenary of each Chamber for its express treatment, within the period of TEN (10 working days).

That [article 22 of Law No. 26,122](#) provides that the Chambers pronounce themselves by means of separate resolutions, and that the rejection or approval of the decrees must be express as established in [article 82 of the Magna Carta](#). That the relevant legal service has intervened.

That this measure is issued in use of the powers conferred by Article 99, paragraphs 1 and 3 of the NATIONAL CONSTITUTION.

Thus,

The President of the Argentine Nation, in a general agreement of Ministers, decrees:

ARTICLE 1 .- This decree is issued in the framework of the public emergency in economic, financial, fiscal, administrative, social security, tariff, energy, health and social [matters](#) established by [Law No. 27,541](#) , the extension of the health emergency provided by [Decree No. 260/20](#) and its amendment and [Decree No. 297/20](#) which established the measure of "social, preventive and compulsory isolation", which was extended by Decrees [No. 325/20](#) , [355/20](#) , [408/20](#) and [459/2020](#) , until May 24 inclusive.

ARTICLE 2 .- The prohibition to make dismissals without just cause and for the reasons of lack or reduction of work and force majeure for the term of SIXTY (60) days counted from the expiration of the term established by [Decree No. 329 /twenty](#).

ARTICLE 3 ° .- The prohibition to carry out suspensions for reasons of force majeure or lack or reduction of work is extended for the period of SIXTY (60) days, counted from the expiration of the term established by [Decree No. 329/20](#) .

Suspensions made under the terms of [article 223 bis of the Labor Contract Law](#) are exempt from this prohibition .

ARTICLE 4 .- Dismissals and suspensions that are provided in violation of the provisions of article 2 and first paragraph of article 3 of this decree, will not produce any effect, maintaining existing labor relations and their current conditions.

ARTICLE 5.- Give notice to the PERMANENT BICAMERAL COMMISSION OF THE HONORABLE CONGRESS OF THE NATION.

ARTICLE 6 .- Communicate, publish, give yourself to the NATIONAL ADDRESS OF THE OFFICIAL REGISTRY and file.

Signatories

FERNÁNDEZ-Cafiero-de Pedro-Solá-Rossi-Guzmán-Kulfas-
Basterra-Meoni-Katopodis-Losardo-Frederic-González García-Arroyo-Alcorta-Trotta-Bauer-Salvarezza-Moroni-
Cabandie-Lammens-Bielsa